

# Venezuela: un Reto para la Comunidad Internacional

Por Armando Durán

## DOCUMENTOS

Desde su primera aparición pública, el 4 de febrero de 1992, la personalidad y las acciones de Chávez han sido controversiales, conflictivas, contradictorias y turbulentas. Confusas en materia ideológica e incomprensibles en cuanto a sus motivos y verdaderas intenciones. Por estas razones, incluso para los venezolanos, cuyas vidas giran casi exclusivamente en torno de su incesante discurso y su desempeño como gobernante, las complejidades del personaje y del proceso político que puso en marcha hace 11 años continúan siendo un reto sin precedentes en la historia nacional. Y si esto es así para nosotros, co-protagonistas del drama aun en contra de nuestra voluntad, ¿qué no será para la comunidad internacional, tradicionalmente ajena a los extraños fenómenos que todavía siguen construyendo la especificidad del mundo latinoamericano?

**Armando Durán** es Doctor en Filosofía de la Universidad de Barcelona, España. Es columnista del diario El Nacional y conductor, junto a Pastor Heydra, de la Tertulia Caliente. Ex Canciller y experto en relaciones internacionales. Analista político.

Este texto corresponde a la ponencia presentada por el analista Armando Durán en el foro “*Estados Unidos y América latina*”. Agradecimientos al Centro de Divulgación del Conocimiento Económico CEDICE de Caracas y a [www.inteligenciaeconomica.com](http://www.inteligenciaeconomica.com)



Desde su primera aparición pública, el 4 de febrero de 1992, la personalidad y las acciones de Chávez han sido controversiales, conflictivas, contradictorias y turbulentas. Confusas en materia ideológica e incomprensibles en cuanto a sus motivos y verdaderas intenciones. Por estas razones, incluso para los venezolanos, cuyas vidas giran casi exclusivamente en torno de su incesante discurso y su desempeño como gobernante, las complejidades del personaje y del proceso político que puso en marcha hace 11 años continúan siendo un reto sin precedentes en la historia nacional. Y si esto es así para nosotros, co-protagonistas del drama aun en contra de nuestra voluntad, ¿qué no será para la comunidad internacional, tradicionalmente ajena a los extraños fenómenos que todavía siguen construyendo la especificidad del mundo latinoamericano?

Lamentablemente, esa democracia que nació el 23 de enero de 1958 dejó pendiente una asignatura esencial. Sus mecanismos formales funcionaban satisfactoriamente, poco a poco se fortalecía en Venezuela una clase media profesional y de pequeños comerciantes, la población, incluso la de menores ingresos, afrontaba su futuro con relativa seguridad. La riqueza, al parecer inagotable del petróleo, financiaba el sueño de casi todos. Sin embargo, los gobernantes de la Venezuela moderna y democrática no podían renunciar a la naturaleza caudillista del poder político. Sólo que ahora, a pesar de ser civiles, eran más ricos y, por lo tanto, más poderosos. Tampoco podían renunciar los gobernados a sus irracionales manifestaciones de fe ciega. La renta petrolera daba pie a las promesas más inauditas. Y todos tan contentos, hasta que el milagro de la multiplicación de los panes se hizo pedazos. La fea realidad se había ido abriendo paso en secreto, paulatinamente, a medida que la renta petrolera dejaba de ser suficiente para satisfacer las insaciables demandas del Estado y de buena parte de la población y, al fin, estalló de golpe un día, aquel negro viernes de 1983. Su secuela más dramática ocurriría 6 años más tarde, el 27 de febrero de 1989. Venezuela, como todos sabemos, no volvería a ser jamás la que había sido.

En este punto crucial de la historia venezolana, Chávez comprendió que le había llegado su hora. Llevaba años conspirando. Con militares de su generación y con algunos dirigentes de la izquierda irredenta de los años sesenta y setenta. Ahora, y al margen de las causas inmediatas de aquel estallido de violencia que conmovió a Venezuela y a buena parte del mundo, Chávez percibió la indiscutible utilidad que tenía para su proyecto esa rabia feroz de un importante sector de la sociedad, que ya no veía en el sistema político tradicional posibilidad

alguna de salvación. Desde un punto de vista objetivo, la conciliación de las élites política, económica y social que le habían dado piso y firmeza a la democracia venezolana, convertida con el paso de los años en simples acuerdos pragmáticos de las cúpulas partidistas, de los grandes grupos económicos y de las organizaciones sindicales, ya no bastaba para superar la crisis provocada por la discrepancia creciente entre una renta petrolera que en términos reales decrecía, y una población, dependiente de ella en gran medida, que en los últimos 25 años casi se había duplicado. Los graves desajustes macroeconómicos, el empobrecimiento gradual de la población, la marginalidad como destino fatal de millones de venezolanos configuraban un cuadro explosivo que las clases dirigentes se empeñaban en no ver, como si en Venezuela no estuviera ocurriendo nada grave. Chávez, en cambio, sí lo hizo. Tres años después intentaba, por la fuerza de las armas, poner a Venezuela al revés.

Aquí surge el primer reto que le presenta el proceso político venezolano a la comunidad internacional. La dificultad para admitir que lo que había sido un intento de golpe militar al mejor estilo de los carapintadas argentinos pudiera en realidad ser una acción revolucionaria de izquierda. Luego se sabría de la participación en la intentona golpista de grupos y personalidades de la izquierda, pero que Chávez los descartó, por ser civiles, de las acciones militares previstas para el 4 de febrero. ¿Desconfianza de Chávez en el mundo civil desde el primer momento?

A su prisión en Yare se acercarían a Chávez otras figuras importantes de la izquierda, Luis Miquilena y José Vicente Rangel, por ejemplo, que más tarde lo convencerían de abandonar el camino de las armas y lanzarse de lleno a la aventura electoral para conquistar el poder democráticamente. Evidentemente, tenían razón. En todo caso, desde Yare también comenzaría Chávez a divulgar las líneas maestras de un pastiche ideológico de lugares comunes del populismo latinoamericano.

Según lo resumiría más tarde en un folleto titulado *La Agenda Alternativa Bolivariana*, Chávez, entre otras cosas, le proponía a los venezolanos:

- Reestructurar el aparato del Estado con miras a hacerlo realmente democrático, popular y eficiente...
- Establecimiento de un modelo socioeconómico humanista y autogestionario basado en la propiedad estatal, privada y mixta...
- Dejar a las empresas básicas y estratégicas en manos del Estado; la agroindustria y servicios esenciales con régimen mixto; la banca y las finanzas con régimen mixto controlado por el Estado; y la importación en

manos del sector privado...

- Declarar la moratoria de la deuda externa y negociar su condonación...
- Adoptar un sistema cambiario regulado, único y flexible en el que la convertibilidad del bolívar quedaría bajo control del Banco Central, el valor de la tasa de cambio estaría anclado y sólo habría una fuente para el otorgamiento de divisas, con una reducción significativa del movimiento de divisas hacia el exterior...

Una vez en libertad, la campaña electoral en marcha, el 4 de febrero de 1998, seis años después de su frustrado golpe de Estado, le formularía las siguientes declaraciones a El Nacional:

“El 4 de febrero es una fecha de esas que marcan el fin y al mismo tiempo el inicio de algo. Es una herida mortal al Pacto de Punto Fijo. Me refiero a esta farsa que llaman democracia y que es en realidad una dictadura con careta democrática. EL MVR ofrece un proyecto. Mi propuesta es la Constituyente. Convocar al pueblo a opinar, a echar los cimientos de un país con democracia verdadera.”

Luego presentaría sus Cinco polos para una Nueva República: la Constituyente para sustituir la democracia representativa por la democracia participativa, el equilibrio social para avanzar hacia una sociedad justa, el desarrollo de una economía humanista, autogestionaria y competitiva, el equilibrio territorial generado por una desconcentración del poder y las inversiones, y, naturalmente, la defensa de la soberanía nacional y lo que él llamaba “mundialización”, es decir, la promoción de un mundo multipolar.

A su manera, Chávez no se ha separado mucho de su oferta electoral.

Sin embargo, su victoria en las elecciones de 6 de diciembre de 1998 no se produjo gracias a esta oferta “bolivariana”. Su mensaje al país a lo largo de la campaña electoral había sido otro, encaminado a establecer el tradicional vínculo entre un caudillo providencial y multitudes en busca de alguien sobre quien depositar su credulidad, su confianza y sus deseos de venganza. Freír en aceite hirviendo las cabezas de sus adversarios políticos, persecución implacable y castigo ejemplar a los corruptos de la democracia puntofijista, fuetazos de capataz gomecista para sancionar a los enemigos del pueblo, anuncios y promesas que sintonizaban perfectamente con el rencor social de millones de venezolanos. Un mensaje que sin la menor duda hubiera hecho realidad de haber triunfado aquella madrugada del 4 de febrero.

En otras palabras, la candidatura presidencial de Chávez contradecía, por su esencia democrática, el intento de golpe de Estado del 4 de febrero; la sistematización de un proyecto político, válido y necesario para participar en un proceso electoral, contradecía su aversión irremediable a los procedimientos de la falsa democracia que había intentado derribar casi siete años antes; y su discurso de justiciero vengador de toda suerte de iniquidades ante multitudes de ciudadanos económica y socialmente excluidos contradecía, en su forma y fondo, la prudencia de su discurso ante auditorios más formales. Las preguntas que se imponían entonces era si el Presidente electo el 6 de diciembre seguía siendo el golpista del 4 de febrero. Si su ascenso al poder por la vía de un evento electoral impecable lo obligaría a transitar, aunque fuese a regañadientes, por el camino democrático. Si, en efecto, Chávez, más allá del populismo, de las extravagancias y la excentricidad, intentaría promover los cambios políticos y económicos que prometía dentro de los límites civilizados de la negociación y los acuerdos democráticos.

Este era un reto desconcertante. ¿Cómo aproximarse a Chávez? ¿Cómo al derrotado comandante golpista del 92 o como al Presidente electo democráticamente del 98? Por esa razón, cuando el 30 de diciembre, en la residencia oficial de La Viñeta, recibió Chávez a Peter Romero, Sub Secretario Adjunto norteamericano para Asuntos Latinoamericanos, a pesar de comprometerse a firmar con Washington un convenio para combatir juntos la corrupción, el contrabando y el narcotráfico, y a pesar de ratificar que su Gobierno deseaba “ampliar y profundizar las relaciones comerciales y de cooperación con los Estados Unidos”, sólo obtuvo del entonces presidente Bill Clinton un saludo condicional: “Nosotros estaremos con él”, declaró Clinton desde Washington, “mientras opere dentro de los parámetros constitucionales para reformar el país y para beneficio del pueblo.” Por esta razón también, cuando algunos días más tarde Chávez viajó a la capital norteamericana, Clinton, en lugar de recibir a Chávez en la Casa Blanca, decidió encontrarse con él “por casualidad”, al coincidir ambos en el despacho del Asesor Nacional de Seguridad. El mensaje de Clinton no dejaba lugar a la menor duda. Frente al enigma Chávez, la posición de Clinton era to wait and see.

Ese aguardar y ver duró, con diversos altibajos, hasta el 11 de abril del año 2002. Durante esos meses interminables, la ruta de Chávez tuvo dos puntos de inflexión importantes. El primero, la redacción de la nueva Constitución por una Asamblea Constituyente integrada en su inmensa y aplastante mayoría por chavistas obedientes; el segundo, las 49 leyes redactadas

en secreto y sin consultar a nadie bajo el cobijo de la Ley Habilitante. Con el nuevo texto constitucional, Chávez borraba el ordenamiento jurídico del antiguo régimen, es decir, la democracia representativa, y echaba los cimientos de la actual “legalidad” revolucionaria, la democracia participativa y protagónica, es decir, la democracia directa de los regímenes totalitarios, en los que la comunicación entre el líder y su pueblo tiene lugar sin la engorrosa e innecesaria intermediación de otras instancias políticas o sociales. Con las llamadas leyes de la Habilitante, Chávez se adentraba en su ambicioso plan por afectar la estructura de la propiedad privada, el funcionamiento de la economía y los mecanismos administrativos de los gobiernos regionales. Sin embargo, ambas decisiones, de cuya finalidad sólo podían dudar los espíritus más inocentes de Venezuela, se habían adoptado sin irrespetar las restricciones formales del proceso democrático. Elecciones libres y a la vez tramposa (el famoso quino) para integrar la Asamblea Constituyente; funcionamiento de los clásicos públicos, jurídicamente independientes de la voluntad presidencial, pero integrados todos por hombres de su mayor confianza, incapaces de dar un paso sin consultar sus decisiones con Miraflores; aprobación de la Ley Habilitante en la Asamblea Nacional con el voto favorable de muchos parlamentarios de la oposición, un recurso empleado por los gobernantes anteriores para poder enfrentar con urgencia la solución de graves problemas económicos y financieros.

Chávez demostraba así su habilidad para conservar su imagen de gobernante demócrata, en todo caso peligrosamente populista, pero nada más. Mientras tanto, se deslizaba sin mayores sobresaltos hacia la instalación de un Estado hecho a la exacta medida de sus propósitos: construir y consolidar, por caminos muy distintos a los tradicionales, una revolución que a todas luces parecía imposible en la Venezuela del siglo XXI.

Ese era el segundo y más formidable reto que le presentaba Venezuela al mundo. ¿Hasta qué punto, la comunidad internacional, habituada a situaciones mucho menos complejas, podía desprenderse de ciertos prejuicios tradicionales y ajustar su análisis del caso Venezuela de acuerdo con una visión más próxima a la realidad y menos convencional?

Esta confusión se agudizó de manera muy notable durante los días trágicos de abril. La inmensa manifestación de protesta del 11 de abril contra las leyes de la Habilitante y el proyecto de politizar el manejo de la industria petrolera, terminó en tragedia a las puertas de Miraflores. A raíz de la masacre de aquella tarde se produjeron los hechos que todos conocemos, aunque

sólo sea a medias. En todo caso puede decirse que el múltiple asesinato, el intento de autogolpe con la aplicación del Plan Avila y los intentos de golpe y contragolpe generaron tal confusión, que en la madrugada del 14 de abril Chávez era restaurado en la Presidencia de la República.

La reacción de la comunidad internacional ante esa sucesión vertiginosa de hechos particularmente dramáticos y desconcertantes fue de asombro y perplejidad. No podía ser de otro modo. Sobre todo, cuando Chávez, aún no repuesto de la incertidumbre de aquellas horas se zozobra y cautiverio, crucifijo de buen cristiano en la mano, hizo pública su conmovedora promesa de rectificación.

Poco importaba que sus palabras fueran falsas. Desde una perspectiva formal de los valores democráticos, Chávez era el legítimo presidente de Venezuela; al margen de las enmarañadas circunstancias que caracterizaron el desarrollo de aquellos hechos, lo cierto era que a Chávez lo habían derrocado altos oficiales de la Fuerza Armada Nacional, desconociendo su autoridad de Presidente de la República y Comandante en Jefe de la FAN; independientemente de las razones que motivaron su rebelión, esos oficiales y un sector de la oposición civil violentaron el hilo constitucional al nombrar a Pedro Carmona Estanga Presidente Provisional sin cumplir con los más mínimos requisitos jurídicos para llenar el vacío de poder; y, sin que hubiera causas que lo justificaran, Carmona Estanga se auto juramentaba y enseguida dictaba sus primeros decretos aboliendo todos los poderes públicos, incluso aquellos cuyos miembros habían sido democráticamente electos, y provocando el rechazo hasta de los propios militares que le habían entregado el poder político.

Chávez aprovechó estas contradicciones para desarrollar lo que desde entonces ha sido su principal argumento político para descalificar a las fuerzas políticas y sociales de oposición. En Venezuela existe un gobierno legítimo y democrático. Sus opositores lo intentaron derrocar entonces con un golpe de Estado. Ese golpe aún está en marcha. Por lo tanto, la oposición no es democrática, sino golpista. A ese calificativo, después del paro cívico nacional y la huelga petrolera, se añadirían los calificativos de terroristas, saboteadores y traidores a la Patria. Pero por los momentos bastaba con la acusación de golpista. De manera muy especial, porque mientras los golpistas seguían conspirando, él, demócrata apegado férreamente a la Constitución y las leyes, convocaba a los venezolanos a unas jornadas de diálogo encaminadas a buscar la reconciliación nacional, invitaba a Jimmy Carter y permitía que César Gaviria montara la Mesa de

Negociación y Acuerdos. Incluso, Chávez se jactó de que mientras él, después de recuperar la Presidencia de la República, en lugar de perseguir con razón y con justicia a los golpistas, había tomado la decisión (y se felicitaba por ello) de rectificar y dialogar con el país, mientras esos golpistas proseguían avanzando ciegamente por el camino de la violencia.

Este fue el tercer reto que le presentó Venezuela a la imaginación internacional. A la duda razonable, a la casi certeza de que todo aquello era un gran engaño de Chávez, se oponía la necesidad inevitable de jugar su juego, sin saber nunca a ciencia cierta cuál sería su última jugada, es decir, la ruptura de los pocos y tenues hilos que formalmente aún lo unían a la naturaleza democrática de la actual realidad política en América Latina, ni cuándo se produciría, si se producía, esa ruptura. En otras palabras, mientras no se produjera ese punto de quiebre definitivo, no quedaba otra alternativa que agotar todas las fórmulas de la negociación para intentar llegar a un acuerdo que permitiera darle a la crisis política venezolana una salida pacífica, democrática y constitucional. Y como en todo momento Chávez, en lugar de cerrar las puertas de ese “diálogo” de manera tajante, en lugar de rechazar con un “No” rotundo la posibilidad del diálogo y la negociación, lo rehuía recurriendo incansable y tercamente a los argumentos de la Constitución y a la manipulación de los poderes públicos para la interpretación parcializada del siempre ambiguo texto constitucional (la suspensión del referendo consultivo del 2 de diciembre es un magnífico ejemplo de esta estrategia), a la oposición venezolana no le quedaba más remedio que mantenerse, mientras Chávez no la rompiera, en esa línea casi invisible de las buenas costumbres democráticas. No hacerlo, cuando menos, equivalía a darle la razón a Chávez cuando acusaba a sus adversarios de golpistas. Dentro de este marco conceptual elaborado por Chávez durante el período de “diálogo” que se abrió a finales de abril y concluyó el 2 de diciembre pasado, cuando comenzó el paro cívico nacional, la comunidad internacional sólo pudo hacer lo que hacía. Armarse de paciencia, creer a medias o hacer que creía que las presiones obligarían a Chávez a negociar una salida adecuada, seguir dudando sobre las verdaderas intenciones de Chávez y poco más. Mientras tanto, Chávez aprovechaba esa larga tregua para reorganizar sus fuerzas, purgar a fondo los cuatro componentes de la FAN, armar sus líneas defensivas en previsión de un nuevo ataque de la oposición más impaciente, y prepararse para ejecutar, una vez superado ese conflicto por venir, lo que en su momento él llamaría “la revolución dentro de la revolución”.

Con la magnitud y la duración del paro cívico nacional, la huelga petrolera y las masivas manifestaciones de calle, comenzó a modificarse la percepción internacional sobre Venezuela. Desde la impresionante marcha del 10 de octubre para exigirle a Chávez “Elecciones, Ya”, Kofi Annan, secretario general de Naciones Unidas, el Departamento de Estado norteamericano y diversos gobiernos de América Latina comenzaron a expresar públicamente su preocupación por los acontecimientos que tenían lugar en Venezuela. Cada día se hacía más evidente que las cosas andaban mal en Venezuela, que no todo estaba tan normal como sostenían Chávez y José Vicente Rangel, y crecía la certeza de que irían peor.

No es este el momento de enjuiciar los propósitos y los resultados de aquellos 63 días de zozobra. Sí quiero insistir en dos aspectos que me parecen fundamentales. Por una parte, ese conflicto, que afectó muy seriamente el mercado internacional de petróleo, le dio a la crisis venezolana verdadera dimensión planetaria. La preocupación y el desconcierto con que la comunidad internacional asumía la incesante crisis política venezolana, afectaba directamente la seguridad de Estados Unidos, sobre todo en momentos cuando Washington se disponía a iniciar la guerra en Irak. Por otra parte, el carácter civil y pacífico de la protesta de más de media Venezuela contra Chávez despejó las dudas que aún subsistían en el ánimo de muchos gobiernos y pueblos sobre la naturaleza del conflicto y espíritu democrático de la oposición venezolana. El discurso incendiario de Chávez en el Foro Social de Porto Alegre, presentándose ante un auditorio de extrema izquierda casi como el heredero de Ernesto Che Guevara y Fidel Castro y amenazando a la burguesía de la región con una guerra continental si no aceptaban por las buenas los cambios revolucionarios que él suponía imprescindibles, completó la nueva imagen internacional de Chávez y del proceso político venezolano. Lo cual no significaba, sin embargo, que en el terreno práctico de los hechos pudiera modificarse el comportamiento de una comunidad que no encontraba resquicios suficientes para condenar abiertamente al régimen chavista. ¿Qué hacer, pues, a pesar de que Chávez descartaba la posibilidad de una salida negociada al acusar frontalmente a Gaviria, a Estados Unidos, a Colombia y a España de intromisión en los asuntos internos de Venezuela? ¿Qué hacer si rechazaba la propuesta Carter y declaraba inútil mantener con vida la Mesa de Negociación y Acuerdos, porque la Constitución era la norma única del gobierno y según esa Constitución lo constitucional era el referendo revocatorio, no producto de ningún acuerdo negociado sino de acuerdo con el artículo 72? ¿Qué hacer si Chávez,

desde Porto Alegre, le decía al mundo que Venezuela no necesitaba que un grupo de señores, el Grupo de Amigos, ayudara a los venezolanos a resolver sus problemas porque el pueblo sabía perfectamente cómo resolverlos?

Se trataba, sin duda, de una múltiple y fuerte bofetada a los venezolanos y a la comunidad internacional, pero esos desplantes ¿constituían el dichoso punto de quiebre de Chávez con la democracia? Sin duda alguna también, este era otro reto que le presentaba el caso Venezuela, el cuarto, a la comunidad internacional.

El quinto reto, por ahora el último, que todavía está en marcha y que yo creo que es el definitivo, comenzó entonces, durante los últimos días del paro cívico y la huelga petrolera, mientras Chávez le reiteraba cada día al mundo, que Venezuela es soberana y no necesita no admite facilitaciones ni mediaciones extranjeras. Exactamente cuando Chávez consideró que había llegado el momento de echar los cerrojos autoritarios que venía engrasando desde hacía tiempo para instalar por fin en Venezuela una dictadura electa, como la calificó Andrés Oppenheimer en las páginas del Miami Herald, y legal, añadiría yo, pero dictadura sin remedio. La primera medida de esta nueva etapa del régimen, de la revolución dentro de la revolución, comenzó con la implementación de un sistema de control de cambios a finales de enero, que en la práctica, como todos sabemos y padecemos, en realidad consiste en una radical suspensión del mercado cambiario. No con la finalidad de impedir que las reservas internacionales llegaran a niveles peligrosamente bajos, sino como instrumento muy eficiente, junto al control de precios, para destruir el aparato productivo y comercial venezolano. Por una parte, este rígido control, administrado con criterio exclusivamente político, dólares para los pocos empresarios amigos de la revolución, ni un solo dólar para sus enemigos, se imponía de acuerdo con lo establecido en la Agenda Patriótica Bolivariana redactada en la prisión de Yare; por otra parte, era castigo mortal a la oligarquía golpista, sabotadora y terrorista; por último, era el primer paso para aplicar por fin las medidas económicas que permitieran el tránsito hacia un modelo verdaderamente revolucionario, gracias al cual el poder, político y también económico, pasaría a manos del “pueblo.”

Las medidas siguientes comienzan ahora a desarrollarse en el ámbito “legal.” La Ley de Responsabilidad Social

de la Radio y la Televisión, para cumplir sus amenazas contra los 4 jinetes de la Apocalipsis y arrebatarle a los venezolanos sus ojos públicos; la Ley del Tribunal Supremo de Justicia, para aumentar, con el voto en la Asamblea Nacional de la mayoría simple de sus miembros, de 20 a 32 el número de magistrados y para concederle al gobierno la potestad de aumentar o disminuir este número en cualquier momento que le convenga; la Ley de Participación Ciudadana (para eso sirve la democracia directa), en la cual se norma, entre cosas, los comités de usuarios que supervisarán los programas de radio y televisión; la Reforma Parcial del Código Penal y la Ley Contra el Terrorismo para criminalizar hasta la más leve manifestación de disidencia con sentencias de cárcel que van, desde tres años por cacerolear a un funcionario público, hasta 30 años por delitos contra una llamada y aún no definida Seguridad Nacional.

Con este paquete de leyes represivas, con el control absoluto de la Fuerza Armada Nacional, la politización absoluta de Petróleos de Venezuela, la ocupación de tierras y la campaña de alfabetización con fines ideológicos desarrollada por “técnicos” cubanos, antes del próximo 19 de agosto, fecha prevista para activar los mecanismos del referendo revocatorio según el artículo 72 de la Constitución, Chávez terminaría de instalar los principales pilares de su revolución. Todo ello, formalmente, dentro del marco de la Constitución y las leyes.

¿Tendrá la comunidad internacional la perspicacia y la voluntad de admitir finalmente la naturaleza totalitaria del actual proceso político venezolano? ¿Seguirá sosteniendo el criterio de que sí, lo que ocurre en Venezuela es preocupante, pero no, todavía Chávez opera dentro de la legalidad democrática? En otras palabras, ¿podrá la comunidad internacional readaptarse a las novedosas características del proceso político venezolano para enjuiciarlo como lo que realmente es, o continuará percibiendo este proceso desde la perspectiva exclusivamente formal de la democracia, sin tener en cuenta su valor universal, es decir, la libertad a secas, sin adjetivos que la modifiquen o restrinjan, único valor que en definitiva puntualiza y precisa la naturaleza verdaderamente democrática o no de una sociedad?

Esas son, amigos de la comunidad internacional, las preguntas que ustedes tendrán que responder antes de que sea demasiado tarde.